

Actualidad

! Recortes sociales

DROGAS

Los impagos ponen en riesgo la ayuda a los drogodependientes

Las administraciones deben ya más de diez millones de euros a las ONG que trabajan con toxicómanos // Las organizaciones vaticinan un «grave problema social» si los usuarios se quedan sin tratamiento

ANTONIO GONZÁLEZ
MADRID

— Hoy parece impensable que vuelva a vivirse en España la alarma social que desencadenó en los años ochenta del siglo pasado la proliferación del consumo de heroína, con la delincuencia que llevaba asociada. Sin embargo, la falta de fondos que sufren actualmente las organizaciones no gubernamentales que llevan gran parte del peso de la asistencia a los drogodependientes hace temer a estas entidades que, de nuevo, las drogas dejen de ser una cuestión sobre todo sanitaria para convertirse en un problema social visible en las calles.

Y es que, según denuncian las voces más representativas de este sector, los retrasos de comunidades y ayuntamientos a la hora de pagar las subvenciones y convenios con los que se financia la asistencia a los drogodependientes y las labores de prevención están ya poniendo en serio peligro la continuidad de estas actividades. Las ONG sostienen que muchos servicios están abocados al cierre, que miles de trabajadores llevan meses sin cobrar sus nóminas y que en breve muchos de los toxicómanos que hoy están “controlados” y en tratamiento volverán a la calle. Además, están convencidas de que el problema no ha hecho más que empezar, ya que temen que todas las administraciones cercenen en 2012 el presupuesto dedicado a la atención a las 250.000 personas que, según sus cálculos, reciben actualmente ayuda cada año por su adicción.

“El mayor problema ahora son los retrasos en los pagos, que oscilan entre los tres y los siete meses según los sitios; los recortes todavía no están decididos, pero estamos seguros de que va a haber”, señala Modesto Salgado, presidente de la Plataforma de ONG sobre Drogas y Adicciones (PODA). En la misma línea, el presiden-



Un toxicómano recibe asistencia en el marco de un programa de reducción de daños en la periferia de Barcelona. DAVID ROIG

En torno a 2.000 trabajadores de ONG llevan meses sin cobrar

«Sin la cobertura de estas entidades, los usuarios volverán a la calle», dice un experto

te de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), Luciano Poyato, sostiene que sólo a las más de 250 asociaciones que forman parte de esta entidad les deben más de diez millones de euros en retrasos de los pagos de los convenios firmados con las administraciones. Estas demoras han causado ya que la mitad de los 3.600 trabajadores de las ONG de UNAD lleven “más de cinco meses sin cobrar”. A su juicio, de mantenerse esta situación algunos servicios comenzarán a cerrar en breve.

El problema está extendido, pero las ONG critican especialmente lo que ocurre con los retrasos en autonomías como Madrid, Castilla-La Mancha, País Valencià o Catalunya.

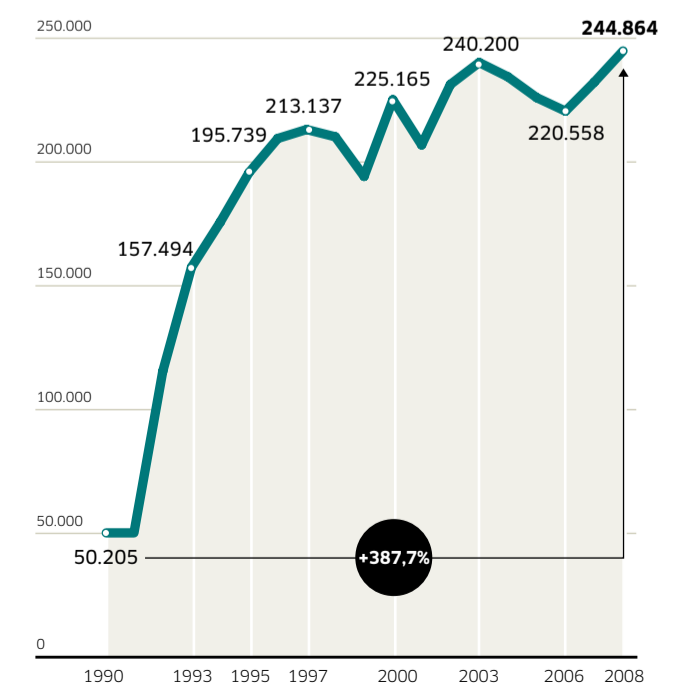
En el caso de Madrid, donde las ONG han convocado una protesta para el miércoles ante la Consejería de Sanidad, los retrasos ya están pro-

vocando problemas serios en algunas asociaciones. Es el caso de Punto Omega, a la que le adeudan 350.000 euros y que afronta una regulación de empleo para prescindir de 40 de sus 100 trabajadores por los impagos, según fuentes del comité de empresa. “Es imposible mantenerse con recursos propios”, sostienen las mismas fuentes, que dan por hecho el cierre a final de año de sus tres pisos para drogodependientes. “16 trabajadores se irán a la calle y 24 pacientes se quedarán sin atención”, se lamentan.

Desde la Comunidad, la directora de la Agencia Antidroga, Almudena Pérez, afirma que “todos los pagos” a las ONG que tienen convenios suscritos con ellos “están ya tramitados” y, en cuanto a las subvenciones, sostiene que “no hay recortes” previstos para 2012. De hecho, señala que, aunque las partidas para acti-

Usuarios atendidos desde 1990

► Cifras notificadas por las comunidades autónomas



FUENTE: PNSD/PLATAFORMA PODA

infografia@publico.es

vidades contra las drogas han bajado casi un 35% hasta los 165.144 euros, el importe dedicado a los centros y servicios ha pasado de 880.000 a 980.286 euros. “La red [asistencial] mantiene su funcionalidad plenamente operativa”, sostiene frente a las críticas de las ONG.

Trabajando sin cobrar

También hay problemas en Castilla-La Mancha, donde la Federación de Asociaciones de Lucha contra las Toxicomanías denuncia a través de su presidente, Alejandro Márquez, que les deben 1,7 millones de euros y que se mantiene el servicio porque “trabajan sin cobrar” y gracias a líneas de crédito privadas “ya gastadas”. Otro caso es el de Catalunya, donde las ONG han sufrido un recorte del 2% en los fondos para pisos y comunidades terapéuticas, como señala Felisa Pérez, presidenta de la Federación Catalana de Drogodependencias. Pérez sostiene que algunos servicios de reducción de daños, sobre todo en Barcelona, ya se han forzado a reducir su actividad en tasas del 7% al 10%, si bien aún no ha habido cierres. También en Andalucía ha habido una disminución del 17% en los recursos de prevención, aunque no de asistencia, según señala por su parte Poyato.

Pero no sólo es sólo cuestión de recortes: la crisis y la propia invisibilidad del problema están relegando las políticas de drogodependencias a un segundo plano, dice Ignacio Calderón, director de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Según señala, en muchas comunidades las políticas de drogas están perdiendo importancia para integrarse en los servicios de salud como departamentos de menor rango. Esto puede causar problemas porque los drogodependientes, y especialmente los heroínómanos (y hay unos 150.000 en España, según sus cálculos), tienen una problemática que “no es fácilmente asumible” por los servicios de salud. “Una persona en tratamiento con metadona no puede ir a un centro de salud a ver si le atienden y que le digan que vuelva la semana que viene”, señala Calderón, que considera esencial la cobertura que dan las ONG, hoy en riesgo. “Las ONG dependen de fondos públicos; si no llegan y desaparece esa red de cobertura, el problema puede descontrolarse y los drogodependientes pueden volver a la calle”, advierte. *



Alejandro es uno de los usuarios de la narcosala de Las Barranquillas. ÁNGEL NAVARRETE

«Si cierran la narcosala no sé adónde voy a ir»

Reportaje

Los usuarios se oponen al cierre de la primera narcosala de España

A. G. MADRID

Aunque sigue atendiendo cada día a medio centenar de usuarios, el dispositivo de venopunción de Las Barranquillas tiene los días contados. La Comunidad de Madrid ha decidido cerrar antes de fin de año las puertas de la que fuera primera narcosala de España, que funciona desde 2000. La Comunidad asegura que no la cierra por falta de presupuesto, sino porque allí “ya no queda nada” y apenas hay asentamientos, explica la directora de la Agencia Antidroga de Madrid, Almudena Pérez. La Comunidad se escuda también en que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha en la zona un plan de erradicación del chabolismo.

Es cierto que Las Barranquillas no es hoy ni una sombra de lo que fue en los noventa, y que de este enorme poblado marginal situado en la Villa de Vallecas apenas queda una decena de chabolas cerca de la narcosala y algunos puntos de venta de drogas rodeados de escombros. Sin embargo, en Madrid no queda ningún otro dispositivo de este tipo —el resto son móviles— y sus usuarios, que pueden ducharse, dormir y recibir tratamiento médico,

La Agencia Antidroga afirma que clausura el centro porque el poblado ya no existe

«Cuando no esté esto, la gente se irá al centro de Madrid», dice un usuario

no saben dónde irán a partir de ahora. Los trabajadores de la narcosala, a los que la Comunidad impide hablar con los medios, también se lamentan y creen que se deja a estas personas, que sufren un grave deterioro, sin alternativas reales de tratamiento.

Muchos llegan procedentes de la Cañada Real, el gran núcleo chabolista que dio el relevo a Las Barranquillas como el gran mercado de las drogas de la capital, pero allí tampoco habrá una narcosala, ya que la Comunidad apuesta sólo por los “dispositivos móviles” para proporcionar metadona.

Pero los usuarios ven otras razones: “Ya han planificado hacer aquí zonas verdes, esto está al lado de la Caja Mágica y lo quiere poner bonito la Esperanza [Aguirre]”, sostiene Fran, de 35 años. “Si se trasladara a la Cañada por lo menos la gente tendría atención sanitaria, comida y albergue. No hay nada como esto. Por

lo menos aquí estamos retirados y si te pinchas nadie te ve”, añade.

Abdel-Maula, de 52 años, añade: “Cuando no esté esto, la gente va a empezar a irse al centro de Madrid, a los parques”. Mientras, su compañero Alejandro, de 44 años, que llegó de Grecia hace tres meses y hoy sólo toma metadona, asiente y se pregunta qué va a pasar ahora. “Yo he venido desde Grecia a la narcosala para quitarme del caballo, y ahora que va a cerrar, ¿dónde voy? No tengo a nadie aquí, ni donde comer, ni ducharme ni ropa ni nada”. Emilio, que tiene 50 años y es adicto desde los 15, reconoce que está “vivo de milagro” y gracias a que le sacaron hace unos meses de la Cañada para llevarle a la narcosala. “Es un error que la cierren; ¿dónde va a ir la gente?”.

Por último, los usuarios lamentan que, antes del cierre, la Comunidad les va a obligar a salir de allí porque el autobús que dispensa metadona dejará de ir el día 25 de este mes. “Nos quieren sacar de aquí antes, para que cuando vengan a cerrar no haya problemas. En Valdembingómez se escudarán en que ya tienen un servicio móvil, pero no van a hacer más. Los yonquis estamos en vías de extinción”, se lamenta otro usuario que prefiere no dar su nombre. Dice que ya tiene bastantes problemas. *

CASTILLA-LA MANCHA

Los farmacéuticos exigen a Cospedal el dinero que les debe



Protesta de los farmacéuticos, ayer en Toledo. EFE

VANESSA PI MADRID

Un centenar de farmacéuticos de Castilla-La Mancha se concentraron ayer en la plaza de Zocodover de Toledo para reclamar a la Junta que ponga fin al impago que arrastran desde que María Dolores de Cospedal, número dos del PP, asumió las riendas del Gobierno regional tras ganar las elecciones de mayo. Fue entonces cuando se dejó de abonar a los boticarios el dinero que la Administración les paga cada mes por las recetas que corren a cargo de la sanidad pública. Aunque en octubre se les pagó el mes de mayo y hace unos días se les liquidó el 25% de las recetas de junio, la deuda ya asciende a unos 230 millones de euros. Si el impago continúa, cuando acabe el año ascenderá a 360 millones.

El pasado 2 de noviembre la Consejería de Sanidad llegó a un acuerdo con los colegios de farmacéuticos de Toledo y Albacete, según el cual se facilitaba a los boticarios solicitar préstamos presentando como aval las recetas emitidas por la sanidad pública. Globalcalca fue la única entidad que se adhirió a esta iniciativa y puso sobre la mesa 40 millones de euros para los farmacéuticos que lo solicitaran.

Pero centenares de boticarios, asfixiados por la situación, y al ver que el impago se alargaba y las negociaciones con la Junta avanzaban a cámara lenta, ya habían solicitado préstamos con anterioridad al acuerdo, teniendo que avalar la cantidad con sus propiedades. “El acuerdo llega tarde y no es completo”,

Los impagos del Gobierno regional ascienden ya a 230 millones de euros

Pese a haber pedido préstamos, los boticarios temen la quiebra

asegura Montserrat Muñoz, farmacéutica de Alcaudete de la Jara, de 2.000 vecinos, y una de las impulsoras de la protesta.

El caso de Muñoz ilustra el quebradero de cabeza que está suponiendo a los farmacéuticos asumir el coste de los medicamentos que se distribuyen a la población. En agosto, pidió un crédito de 250.000 euros. “O lo pedía o cerraba”, explica. Ya ha gastado 170.000 de ellos en pagar a los proveedores de los medicamentos y en mantener su establecimiento. Con los 80.000 euros que le quedan asegura que no logrará llegar a fin de año.

Muñoz no puede rescindir el préstamo, por el que pagó 1.000 euros de intereses el mes pasado, si la Junta no le paga. “Estoy vendida al Sescam [el servicio de salud de Castilla-La Mancha]”, denuncia. El 95% del dinero que factura es en recetas. Por su parte, el Consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, calificó de “grupo minúsculo” a los manifestantes y les animó a “no perjudicar al resto de sus compañeros”. *